

LAS LEYES MEMORIALES EN FRANCIA: DEBATES HISTORIOGRÁFICOS, CONTROVERSIAS PÚBLICAS Y DEMANDAS SOCIALES

Jorge Garcés González

Universidad de Zaragoza. Dpto. Historia

(jgarces@unizar.es)

<https://orcid.org/0000-0002-0463-1876>

Introducción

En las últimas décadas, el fenómeno de la memoria histórica se ha convertido en una especie de religión civil cuya presencia se percibe tanto en el campo historiográfico como en los ámbitos políticos, urbanos y culturales. Autores de la talla de Henry Rousso han definido nuestra época como «los tiempos del deber de memoria y del *marketing* memorial». ¹ Surgida de las demandas de reparación, justicia y verdad, lo cierto es que puede llegar a ser instrumentalizada y manipulada a conveniencia por los agentes políticos debido a su capacidad para apelar a las emociones del individuo. Esta facultad la puede llegar a convertir en un instrumento más al servicio de la movilización electoral perdiendo, por lo tanto, su carga crítica y democrática.

Sin embargo, esta hegemonía de la memoria histórica en los procesos socioculturales y políticos no siempre ha sido tan evidente como en la actualidad. En gran parte de Europa, el trauma que supuso la Segunda Guerra Mundial, lejos de fomentar el recuerdo de lo sucedido, pareció guiar a los individuos

y a los estados hacia una mirada introspectiva sobre su pasado en su afán por construir un nuevo marco europeo de convivencia y olvidar lo ocurrido. Ni siquiera el holocausto judío gozó de una reflexión profunda en la inmediata postguerra; autores como Primo Levi o Raul Hilberg, cuyas lecturas nos parecen indispensables, apenas recibieron atención mediática en su momento.

Los años noventa del siglo XX marcaron el inicio acelerado del proceso de rememoración del pasado y la incorporación de traumas históricos al relato identitario. Las causas de este *boom memorial* fueron múltiples: la primacía de la figura de la víctima y la reivindicación de los Derechos Humanos; el repliegue hacia identidades raciales, culturales o religiosas que sustituyeron las antiguas, nacionales o de clase; la globalización y la compleja integración en la sociedad de ciertos sectores poblacionales; la instrumentalización política y la pugna por mantener la identidad nacional; la judicialización de la historia y la pérdida de la posición de privilegio del historiador; y, por último, el auge de la historia del tiempo presente.

En este orden de cosas, la fundación en Francia del Institut d'Histoire du Temps Présent (IHTP) —creado en 1978 por miembros de l'École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS)— se inscribe dentro de este doble proceso: el despertar de una memoria europea e internacional basada en los grandes traumas históricos del siglo XX y la emergencia de una nueva historiografía de lo contemporáneo, tanto desde un punto de vista etimológico como epistemológico.

Bajo la presidencia de François Bédarida (1980-90), el IHTP desplegó su actividad por medio de una publicación propia, la revista *Vingtième Siècle. Revue d'histoire*, cuyo número de abril-junio del año 1994 merece ser destacado. Algunos autores no dudan en datar con dicha publicación el comienzo de una auténtica toma de conciencia de la existencia de las guerras de memoria en Francia. «Una nueva estrella parece estar en constante alza en el firmamento de los grandes valores cívicos: la memoria», así comienza Daniel Lindenberg —historiador especialista en la historia de los intelectuales—, su artículo «Guerres de mémoire en France» en dicho número. Dicho artículo revelaba un hito importante en el desarrollo del conflicto memorial francés: los conflictos en torno a la colonización, la esclavitud y la inmigración parecen todavía incapaces de abrirse hueco en los debates sobre la historia francesa.

Siguiendo, precisamente, las conclusiones a las que se habían llegado en otro número de *Vingtième Siècle* —la publicación de enero-marzo de 1985—, Dimitri Nicolaidis dirigió la obra *Oublier nos crimes. L'amnésie nationale, une spécificité française?* (Editions Autrement, París, 1994), donde presentaba los conflictos memoriales como un factor constitutivo de la identidad francesa, irremediamente re-

lacionado con el modelo social surgido de la experiencia revolucionaria de 1789. Una docena de historiadores analizan en la obra los fenómenos de amnesia colectiva, las políticas de amnistía que favorecerían la perpetuación de una cierta memoria oficial, la construcción de diversos mitos nacionales y, por último, el fenómeno de la rememoración. El objetivo de dicho trabajo no era, decía Nicolaidis, «destruir la bella unidad nacional, ni imponer una mala conciencia a los franceses, sino proponer una representación de Francia menos monolítica y más plural y significante».²

El tiempo de silencio estaba dejando paso al tiempo del perdón, tal y como lo expresaron Pascal Blanchard e Isabelle Veyrat-Masson.³ Estos dos autores dirigieron una buena síntesis sobre la cuestión que nos ocupa: *Les guerres de mémoires. La France et son histoire* (La Découverte, París, 2008). La obra traza una temporalidad memorial única para la República francesa que comenzaría con el centenario de la Revolución de 1789 y el *affaire Dreyfus*, atravesaría todo el siglo XX, y culminaría en nuestro presente, época en la que surgiría una competencia memorial que discurre tanto por vías académicas como mediáticas. La originalidad de su obra reside en su perspectiva de análisis, basada en dos pilares: los *territorios*, fenómenos históricos que más controversia suscitan en la opinión pública, el espacio académico y el ámbito político,⁴ y las *armas*, los medios a través de los cuales se vehiculan dichas polémicas.⁵

El tiempo de los muertos *pour* Francia tocaba a su fin y comenzaba el de los muertos *à cause de* Francia.⁶ La República francesa comenzaba a *digerir* de manera más o menos difícil las memorias que obligaban a modificar el relato oficial de su identidad nacional y afrontar la llamada «competencia entre pasados». Con esta idea como pivote central, y basándose en las comunicaciones presentadas con ocasión

del coloquio «Les usages politiques du passé dans la France contemporaine des années 1970 à nos jours», organizado en septiembre de 2003, profesionales como Maryline Crivello, Patrick Garcia y Nicolas Offenstadt decidieron editar las ponencias que tuvieron como nexo común las emergencias competenciales entre lo nacional y lo local y el valor heurístico de un estudio relativo a los usos políticos del pasado desde la década de 1970. Su labor dio lugar a la obra *Concurrence des passés. Usages politiques du passé dans la France contemporaine* (Publications de l'Université de Provence, Aix-en-Provence, 2006).

La primera parte de la obra, «Enjeux locaux, impasses supranacionales», analiza diversos ejemplos que nos ayudan a comprender el uso que se le da a la historia y a la memoria en los espacios locales. Si durante mucho tiempo la nación fue el lugar por excelencia donde ejercer una intensa utilización política de la historia, actualmente la nacional no resulta ser más que una escala entre otras muchas; esto ha provocado una multiplicación de los *productores de historia*, la competencia entre las distintas asociaciones con vocación memorial o patrimonial y la modificación de la labor del historiador. En la segunda parte del libro, «Concurrences et controverses», se analizan, entre otras, tres grandes polémicas historiográficas: los historiadores de la guerra de Argelia y sus controversias políticas en Francia, la colonización y, por último, un análisis sobre la historia del tiempo presente y su exigencia de respuesta ante las demandas sociales.

Con estos estudios como textos imprescindibles y un conjunto amplio de documentación original y fuentes secundarias, propongo en el presente artículo analizar las motivaciones y consecuencias sociales e historiográficas suscitadas en Francia con la promulgación de cuatro leyes que, *a posteriori*, recibieron el calificativo de «memoriales». Me refiero, por orden cro-

nológico de publicación a: (1) la ley Gaysot de 1990, destinada a reprimir todo acto racista, antisemita o xenófobo; (2) la ley del 29 de enero de 2001, que reconocía el genocidio armenio; (3) la ley Taubira del 21 de mayo del mismo año, sobre la identificación de la trata y la esclavitud trasatlántica y en el Océano Índico como crimen contra la humanidad; y, por último, (4) la ley del 23 de febrero de 2005 sobre la contribución nacional de los repatriados y la enseñanza positiva de la colonización en las escuelas.

La criminalización del negacionismo

Como bien señaló Daniel Lindenberg, el gran centro de atención sobre el que se posaron sus miradas los historiadores conscientes de la necesidad de una revisión del relato oficial fue el régimen colaboracionista de Vichy: «Ningún acontecimiento desde la Revolución —decía Daniel Lindenberg— había suscitado tal avalancha de polémicas, alegatos, revelaciones autobiográficas y, finalmente, teorías de todos los géneros».⁷ Este período de la historia francesa —que Henry Rousso calificó en *Le syndrome de Vichy* (Seuil, París, 1987) de duelo inacabado, rechazo y obsesión— fue interpretado en la postguerra de una manera interesada en preservar la imagen heroica de su pasado.

Tras la victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial, Francia obtuvo ante la opinión pública la categoría de víctima de la agresividad alemana, y De Gaulle supo aprovechar este estatus reconstruyendo la unidad nacional a través de un relato que pretendía superar el pasado más oscuro del país.⁸ Esta actitud de olvido se reflejó también en la práctica política desde 1947, momento en el que se desvaneció en Europa occidental la voluntad de una depuración completa de los individuos provenientes del colaboracionismo; desde entonces se promulgó una serie de amnistías que se prolongaron hasta 1953 bajo el pretexto de la reconciliación nacional y la paz civil.

La política nacional del general De Gaulle fue clave a la hora de articular el relato de una Francia resistente en contraposición a una amnesia palpable en relación al colaboracionismo francés. Décadas después esa posición sobre la que De Gaulle había construido el relato nacional se debilitó. El discurso oficial fue revisado por historiadores como el estadounidense Robert Paxton quien, en su obra *Vichy France: Old Guard and New Order, 1940-1944* (Alfred A. Knopf, Nueva York, 1972), no dudó en afirmar —apoyándose en los archivos alemanes— que el régimen de Vichy constituyó un proyecto político de corte fascista y que fue, además, colaborador voluntario del Tercer Reich en cuestiones como la deportación de los judíos. Frente a las tesis que Robert Aron defendió en *Histoire de Vichy, 1940-1944* (Fayard, París, 1954), donde interpretaba dicho régimen como una realidad política impuesta por la Alemania nazi, Paxton lo explicaba como un proyecto ideológico singular vinculado a los fascismos de Europa; de ello se derivaba que la responsabilidad de la puesta en marcha de los trenes con destino a los campos de exterminio recaía ya en autoridades francesas y no solo en las alemanas.

Por su parte, el israelí Zeev Sternhell, historiador de las ideas y la ciencia política —autor de *La droite révolutionnaire (1885-1914). Les origines françaises du Fascisme* (Seuil, París, 1978)—, sostenía que en cada generación francesa desde el boulangismo de finales del XIX, contestatarios de izquierda y de derecha habían amenazado la democracia liberal en Francia. Todavía más polémica fue su obra *Ni droite ni gauche. L'idéologie fasciste en France* (Éditions du Seuil, París, 1983) donde sostenía de una manera no exenta de polémica que el fascismo había nacido ideológicamente en Francia, lo que despertó la reacción de relevantes historiadores del momento, franceses la mayoría de ellos. Años después retomó de nuevo esa idea con la publicación de *Naissance de l'idéologie fasciste* (Fayard, París,

1989), obra en la que situaba a Francia como la cuna del revisionismo revolucionario a través de la figura de Georges Sorel.

Las nuevas aportaciones de los historiadores propiciaron que, desde entonces, el olvido de la participación francesa en la Shoah quedara identificado como un error histórico, pero también «como una falta moral y política que obstaculiza el porvenir de nuestra sociedad».⁹ La homogeneidad discursiva del pasado nacional, anteriormente honroso, épico y memorable, quedaba completamente rota. Las prácticas institucionales así nos lo confirman: el que fuera ministro del Interior bajo la presidencia de Mitterrand, Charles Pasqua, examinó en 1987 la posibilidad de combatir el negacionismo mediante la creación de un «delito de negación de los crímenes contra la humanidad»; por extensión, una proposición de ley interpuesta el 2 de abril del año siguiente apuntaba a «aquellos que atentan contra la memoria o el honor de las víctimas del holocausto nazi negando o minimizando su alcance».¹⁰ En esta coyuntura llegamos al año 1990, momento clave en el proceso de construcción memorial de la Vª República.

El 13 de julio de dicho año se aprobó una ley tendente a reprimir todo acto racista, antisemita o xenófobo cuyo artículo primero estipulaba que «toda discriminación fundamentada sobre la pertenencia o no-pertenencia a una etnia, una nación, una raza o una religión queda prohibida».¹¹ La conocida como Ley Gayssot, propuesta por el diputado comunista Jean-Claude Gayssot —en un momento de conmoción suscitada por la profanación del cementerio judío de Carpentras, en mayo de dicho año—, introdujo en Francia el llamado «delito de contestación»; aquellos que fueran acusados de cuestionar públicamente los hechos históricos calificados como crímenes contra la humanidad por el estatuto del Tribunal militar internacional de Núremberg en 1945 serían condenados al pago de una multa económica y/o encarcelados durante

un año. No podemos dejar de lado las influencias jurídicas de esta ley:

Esta ley provocó una intensa competencia memorial que llevó a la promulgación de nuevas leyes y a la presentación de numerosas proposiciones de ley promovidas por otros grupos portadores de memorias heridas. Se depositaron propuestas para calificar de crimen contra la humanidad o de genocidio hechos históricos como las actuaciones de los cruzados en Oriente Próximo (1095-1291), el ‘genocidio vendéen’ (1793-1794) o el ‘holodomor ucraniano’ (1932-1933) [...] Se abría la posibilidad de la retroactividad sin límites y la victimización generalizada del pasado. En lo sucesivo, cada grupo que hubiera sufrido algún tipo de represión podía reclamar la consideración de genocidio, demandas que los partidos políticos apoyaban en el Parlamento según sus intereses partidistas.¹²

Reflejo del síntoma, la ley no fue la causa de un resurgimiento memorial, sino el producto, en este caso legislativo, de un proceso mucho más profundo que llevaba tiempo desarrollándose. De hecho, nadie en este momento calificó dicho texto como «memorial». La noción *ley de memoria* es muy posterior: aparece en el año 2005 para designar retrospectivamente un conjunto de disposiciones de las cuales, la más antigua, fue esta ley Gayssot. No obstante, muchos se niegan aún hoy a considerarla como una auténtica ley memorial; lo que nadie pone en cuestión es que se trata de la única –como veremos– que asume un carácter penal instituyendo un posible delito. De nuevo: la motivación que subyace en la ley no es un deber de memoria –ausente a estas alturas todavía– sino un imperativo de vigilancia que, eso sí, introducía una radical novedad en el corpus jurisdiccional francés: por primera vez, y a diferencia de la legislación precedente que condenaba de manera universal y abstracta toda forma de racismo o antisemitismo, esta ley de 1990 hacía referencia a un episodio histórico particular cuyo desacato ultrajaba la memoria de una comunidad particular.¹³

En este sentido, la presidencia de Jacques Chirac marcó un hito en el modo en que Francia hacía frente a los fantasmas de Vichy. El 16 de julio de 1995, Chirac pronunció un discurso en el Vélodrome d’Hiver en el que, por vez primera, un presidente de la República reconocía la responsabilidad francesa en la Shoah. Antes que él, François Mitterrand se había convertido en 1993 en el primer presidente que había participado en un homenaje en honor a las víctimas celebrado también en el Vel d’Hiv, donde el 16 de julio de 1942 el régimen de Vichy movilizó a la policía francesa para llevar a cabo una redada que condujo a los campos de exterminio a más de diez mil hombres, mujeres y niños judíos. Sin embargo, el presidente socialista exculpó a la República francesa de lo sucedido. Su llegada al acto de 1993 estuvo acompañada de silbidos, gritos e insultos. Por el contrario, dos años después Chirac reconocía que en ese día Francia faltó a su palabra y entregó sus protegidos a los verdugos, llevando a cabo lo irreparable.

Con posterioridad, la política pública de Nicolas Sarkozy se movió durante sus cinco años como presidente de la República (2007-2012) en coordenadas muy distintas de las de Chirac. Durante su mandato, su deseo de preservar la imagen de una Francia incorruptible ante la ideología nazi no se fundamentó en un pacto de silencio que restableciera la sombra de la duda sobre lo sucedido en Vichy, sino en reiterar que Francia nada tenía que ver con el régimen del mariscal Pétain.

El reconocimiento del genocidio armenio

En mayo de 1998 la Asamblea Nacional adoptó una proposición de ley sobre el reconocimiento del genocidio armenio de 1915 que, posteriormente, fue convertida en ley a todos los efectos (29 de enero de 2001). Su artículo único –donde se afirmaba que «Francia reconoce públicamente el genocidio armenio

de 1915»—,¹⁴ demuestra el carácter puramente declarativo de la ley. Por medio de su publicación, Francia se atrevía a condenar públicamente el genocidio armenio, lo que provocó una reacción airada por parte de las autoridades turcas, y alegría entre la comunidad armenia asentada en Francia, que casi llega al millón de individuos y que posee un nivel de renta considerable.

Pese a su honorable motivación, la ley implicaba ciertos peligros. El uso del término «genocidio» aplicado a la experiencia armenia podía llevar al error de trazar una equivalencia absoluta con el genocidio judío. El holocausto perpetrado por los nazis funciona hoy como baremo, como vara de medir otras políticas de aniquilación de la vida humana en distintas geografías y escalas. No son pocos los autores que han usado esa expresión —la de «genocidio»— para referirse a asesinatos en masa en otros contextos y tiempos, episodios de violencia extrema que, no obstante, deberían ser denominados de otro modo más preciso.

Si dedicamos unas líneas a sintetizar la ausencia o presencia de la memoria del genocidio judío en los debates públicos, nos daremos cuenta, además, de la gran influencia de los contextos geopolíticos. Si en los años cincuenta del siglo pasado el fenómeno fue completamente omitido, durante las dos décadas siguientes adquirió una importancia decisiva como elemento cohesionador de los intereses comunes de Israel y EEUU.¹⁵ En los años setenta la experiencia del Holocausto se independizó de cualquier otro pasado traumático, convirtiendo la memoria de la Shoah en una pieza autónoma dentro del proceso de recuperación memorial. Es entonces cuando, por primera vez, el genocidio judío se convierte en Francia en «un tema de actualidad en sí mismo y no como una faceta más de la deportación» (Lalieu, 2001: p. 92). En cuanto a los años ochenta y noventa, el Holocausto se tematizó y se exportó al mundo

mediante la técnica cinematográfica y la pantalla de televisión.¹⁶

Pues bien, con una voluntad de precisión conceptual el historiador británico Mark Mazower enumeró un conjunto de diferencias entre la trágica experiencia armenia y el holocausto judío. En el caso armenio, el objetivo no era la total aniquilación del pueblo; de hecho, algunos armenios pudieron esquivar la muerte mediante una conversión que resultó del todo imposible para los judíos. Por otro lado, el aparato estatal otomano difería notablemente del existente en el régimen nazi y, por último —todo según Mazower—, el estado otomano no poseía nada que pudiera compararse con la maquinaria asesina industrializada del Tercer Reich. Mazower, en su labor como historiador, se esfuerza por aunar una labor investigadora rigurosa —que define conceptos y describe matices evitando la equivalencia entre fenómenos— con un compromiso social que le hace condenar lo que, sin duda, fue un genocidio, en el que «las muertes fueron planificadas deliberadamente y cometidas desde las más altas instancias del estado otomano».¹⁷

Basándonos en la precisión conceptual y en el respeto por el correcto uso del vocabulario histórico, debemos recurrir a lo estipulado en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, en concreto a su artículo sexto, donde se define «genocidio» siguiendo lo estipulado por la Asamblea General de la ONU en 1948:

Se entenderá por «genocidio» cualquier de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal: (a) matanza de miembros del grupo; (b) lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo; (c) sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial; (d) medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo; (e) traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo.

Mazower es consciente de que el término es «esquivo para los historiadores» porque su conceptualización es «al mismo tiempo demasiado limitada (tiene en cuenta la represión étnica, racial y religiosa, pero no la política o la económica) y asombrosamente abierta».¹⁸ Por todo ello, deberíamos reconsiderar el hecho de tomar el genocidio judío como referencia a partir de la cual analizar otros fenómenos de violencia que, en el fondo, remiten a formas de organización diferentes, están motivados por creencias y estrategias que no coinciden con las del nazismo y fueron, por fortuna, menos eficaces en su labor aniquiladora.

Conviene tener en cuenta, en definitiva, que aplicar una misma etiqueta para acontecimientos tan diferentes implica un riesgo de generalización que conduce ciegamente a subrayar elementos comunes sin valorar convenientemente los diferentes contextos. Las diferencias y matices, que deben ser estudiados y explicados por los historiadores, son completamente ignoradas por algunos discursos que tienden al relato generalista, a la comparación anacrónica y a la apelación directa de la emoción sin esforzarse, en ocasiones, en realizar un auténtico ejercicio de comprensión.

Sea como fuere, la ley del 29 de enero de 2001 marcaba un hito. La Asamblea Nacional inscribía con ella en el derecho francés un acontecimiento que no guardaba relación directa con su historia, pero que resaltaba una identidad no solamente francesa sino franco-armenia. Es más, en la exposición de motivos que recoge la proposición de ley —recuérdese que el procedimiento que seguía la Asamblea pasaba, en primer lugar, por la vía de la proposición y no por la del proyecto de ley porque emanaba de los diputados y no del Gobierno— se afirma que el genocidio armenio quedaba inscrito en la memoria colectiva de la humanidad, de modo que se remarcaba el carácter universal del acontecimiento, más aún tras el reconoci-

miento de lo sucedido por las Naciones Unidas en 1985 y por el Parlamento europeo en junio de 1987.

La memoria aparece, pues, como un fenómeno que traspasa fronteras y que permea realidades diversas a escalas distintas; también desde el punto de vista historiográfico la memoria se convirtió en un objeto de estudio renovado que se alejaba cada vez más de su carácter eminentemente nacional —la obra de Pierre Nora sería el gran paradigma— y que comenzaba a inscribirse tras la desaparición en 1989 de la situación de bipolaridad geopolítica internacional dentro de una lógica globalizante. Por todo ello, el reconocimiento que hizo la Asamblea Nacional francesa del genocidio armenio, ochenta y seis años después del suceso, nos permite señalar un proceso de mutación que se produce en el seno de la propia disciplina histórica: el paso de las historias nacionales a las historias mundiales.

La esclavitud como crimen contra la humanidad

El 21 de mayo de 2001, la Asamblea Nacional sacaba adelante otra proposición de ley que había sido presentada en febrero de 1999 por la que se reconocía la trata de esclavos como crimen contra la humanidad.¹⁹ Por la presente norma, la República francesa «reconocía que la trata negrera transatlántica así como la trata en el Océano Índico de una parte, y de la esclavitud por otra, perpetrados a partir del siglo XV en las Américas y el Caribe, en el Océano Índico y en Europa contra poblaciones africanas, amerindias, malgaches e indianas, constituye un crimen contra la humanidad».

La Ley Taubira —denominada así por su promotora en la Asamblea Nacional, la diputada por la primera circunscripción de la Guayana francesa Christiane Taubira—, nada dice sobre el comercio de esclavos protagonizado por los musulmanes o el que tenía lugar dentro de las fronteras africanas y, por lo tanto, no condena

la esclavitud en su totalidad, sino solamente la reconocida como tal por la ley.

La dificultad de adjetivar de modo maniqueo este conjunto de leyes memoriales, tan distintas entre sí, adquiere un grado mayor si atendemos a la situación que sufrió el historiador francés Olivier Pétré-Grenouilleau, acusado por un colectivo memorial de incumplir la Ley Taubira. Es interesante describir el proceso al que se enfrentó Pétré-Grenouilleau, entonces profesor en la universidad de Lorient, porque se trata de un caso que generó una extensa literatura sobre la judicialización de la historia, la libertad del historiador y la influencia de las asociaciones de defensa de alguna causa memorial particular.

Con motivo del galardón al mejor libro de historia que acababa de recibir Pétré-Grenouilleau por parte del Senado francés, el *Journal du Dimanche* publicó una entrevista suya el día 12 de junio de 2005 en la que se negaba a identificar la esclavitud como genocidio. Argumentaba que las características que hacen posible a este último no se corresponden con la finalidad de la trata de esclavos: el exterminio sistemático de personas se contraponen a su explotación con fines económicos. Estos comentarios no pasaron desapercibidos para el *Collectif d'Antillais, de Guyanais, Réunionnais et Mahorais*, asociación que denunció al historiador al día siguiente de publicarse su entrevista por negar el carácter de crimen contra la humanidad tal y como había sido reconocido por la ley del 23 de mayo de 2001.

El mismo día que Patrick Karam, presidente y portavoz del denominado *Collectif DOM*, presentó la denuncia ante el *Tribunal de Grande Instance* de París, Claude Ribbe, responsable de la comisión de cultura del *Collectif* —en cuya obra *Le Crime de Napoleon* (2005) identificaba el restablecimiento de la esclavitud por parte de Napoleón como un antecedente del genocidio judío—, culpó a Pétré-Grenouilleau de estar

cegado por el racismo. Las acusaciones eran, pues, extremadamente graves.

La denuncia causó una fuerte conmoción en el seno de la comunidad de historiadores, mucho más en el propio Pétré-Grenouilleau, quien sufrió con dicha demanda un cuestionamiento de su labor como investigador. No olvidemos tampoco el carácter moralista que contenía la denuncia, interpuesta con el propósito de que Pétré-Grenouilleau fuera suspendido de sus funciones universitarias por cometer revisionismo. La comparación que hacía el *Collectif DOM* entre Pétré-Grenouilleau y Bruno Gollnisch, responsable del Frente Nacional, nos da idea de la gravedad de la situación. La inseguridad jurídica parecía amenazar la labor de los historiadores.

Llegados a este punto, es necesario señalar que la denuncia interpuesta contra el historiador fue finalmente retirada en febrero de 2006. Sorprenden, no obstante, las razones esgrimidas por la asociación para tomar dicha decisión: no retiró la demanda por haber aceptado las tesis planteadas por Pétré-Grenouilleau, lo cual no hubiera constituido una deshonra para su reivindicación memorial, sino un aprendizaje sobre su propio pasado, sino más bien para esquivar una presión mediática que empezaba a serles insoportable. En definitiva, a los tiempos y ritmos de la profesión histórica se añadían los del espacio público, mediatizado por una confrontación que alcanzará su máximo apogeo con la promulgación de la siguiente ley que voy a tratar.

Valorización positiva de la colonización

En diciembre de 2002 Jacques Chirac inauguró en el *quai Branly* un memorial nacional en honor a los soldados franceses muertos en África del Norte. Para el entonces presidente de la República este gesto simbolizaba la asunción plena por parte de Francia de su deber de memoria. Un año más tarde, y día tras día, los

diputados de la UMP²⁰ comenzaron a proponer un proyecto de ley que tenía por objeto rendir homenaje a la obra colonial francesa; este será el proyecto que inspirará el controvertido artículo cuarto de la ley del 23 de febrero del año 2005 de la que ahora nos ocupamos.²¹

Esta fue la ley memorial que más polémica generó entre la comunidad científica y académica, y en la opinión pública francesa en general. Dicha ley reconocía la contribución de la nación y de los repatriados en la labor que Francia realizó en sus territorios de ultramar. Dirigida por los ideólogos de la derecha francesa pero validada tanto por estos como por diputados del centro y de la izquierda, en su artículo primero se afirmaba que «la Nación expresa su reconocimiento hacia las mujeres y hombres que participaron en la obra realizada por Francia en sus antiguos departamentos franceses de Argelia, Marruecos, Túnez y en Indochina, así como en los territorios emplazados anteriormente bajo soberanía francesa».

La ley preveía, entre otras medidas, la creación de una fundación a favor de la memoria de la guerra de Argelia y los combatientes de Marruecos y Túnez —una idea retomada por Nicolas Sarkozy que le permitió movilizar a su conveniencia a diversas asociaciones memoriales—, pero, sin lugar a dudas, el artículo cuarto fue el que provocó la reacción más hostil no solo contra esta ley en particular sino contra todo el proceso de legislación memorial en general. El controvertido artículo —que, y esto es importante, será finalmente eliminado por Jacques Chirac en enero de 2006 tras agrias polémicas—, señalaba lo siguiente: «Los programas escolares reconocen en particular el rol positivo de la presencia francesa en ultramar, especialmente en África del Norte, y conceden a la historia y a los sacrificios de los combatientes del ejército francés provenientes de estos territorios el lugar eminente al que tienen derecho». La promulgación de este artículo cons-

tituía una clara intromisión en la facultad educativa de los docentes que atentaba también contra las investigaciones de los historiadores, la mayoría de los cuales no estaban imbuidos de la lógica asociada al proceso civilizatorio que en su día popularizó Norbert Elias y que subyacía en el articulado de la ley.

La reacción por parte de la comunidad científica y educativa no se hizo esperar. Perplejos por una injerencia tan flagrante del ámbito político en la educación, denunciaron la imposición de una historia oficial por parte del Estado que, según Dimitri Nicolaidis, pretendía «rehabilitar el pasado colonial y satisfacer al mismo tiempo las reivindicaciones de una clientela política, la de los repatriados de África del Norte».²² La promulgación de esta cuestionada ley contribuyó —como explico en el siguiente epígrafe—, a una toma de conciencia por parte de los *profesionales de la profesión* con la intención de potenciar su labor cívica. ¿Qué actitud adoptaron ante esta flagrante injerencia política en su labor como historiadores?

Los historiadores en el debate público

La recuperación de la fe ciega en el progreso y el desarrollismo tecnológico manifestada por parte de la República en dicho artículo cuarto constituía una maniobra que pretendía edulcorar las críticas historiográficas sobre el pasado francés, e inclinó a la Asamblea a votar a favor de una ley que dictaba el discurso que debía enseñarse a los alumnos franceses. Como defendió Gilles Manceron, esta ley sobre la *colonización positiva* y el rechazo a toda política de *repentance* envalentonaron a los nostálgicos de la Argelia francesa, y del período colonial en su conjunto, y contribuyó a legitimar la reaparición de discursos y prácticas racistas.²³

El término *repentance*, que será la idea clave contra la cual Nicolas Sarkozy articulará su discurso político antes y durante su mandato

presidencial, para mejor salvaguarda de la visión heroica y pulcra historia francesa, tiene una connotación religiosa implícita. Aunque podríamos traducir el concepto como «arrepentimiento» o, incluso como «expiación», ninguno de estos vocablos nos acerca a su significado último. Por lo tanto, creo conveniente conservar la expresión en su lengua original y definir la política anti-*repentance* propia de Sarkozy consistió en un ejercicio discursivo y una política oficial que se desarrolló en el ámbito público para preservar un cierto relato de la Francia eterna y una forma concreta de identidad nacional.

En este orden de cosas, la aparición del llamamiento público titulado *Liberté pour l'Histoire* –publicado por el diario *Libération* el 13 de diciembre de 2005– supuso un hito en el proceso de organización corporativa a la que se sumaron numerosos historiadores con la intención de participar en el debate público sobre la creciente judicialización de la disciplina y la injerencia de los políticos en el programa educativo. El llamamiento no se ceñía únicamente a una crítica del artículo cuarto de la ley de febrero de 2005, sino que ponía en cuestión todas las leyes memoriales aprobadas con anterioridad. Su crítica pronto ganó apoyos gracias a dos factores: el prestigio y fama de la mayoría de los signatarios del manifiesto, entre los que se encontraban Jean-Pierre Azéma, Marc Ferro, Pierre Nora, Françoise Chandernagor, René Rémond, Jean-Pierre Vernant, Paul Veyne y Pierre Vidal-Naquet, y por la capacidad que tuvieron estos hombres y mujeres para crear la asociación homónima al texto fundador, que dotó a sus demandas de un eco mediático mucho mayor.

Como señaló Boris Adjemian, «las leyes memoriales se convirtieron, para sus detractores, en el símbolo de la debilidad del político frente a las presiones de comunidades que pretenden presionar a la nación para que legisle a su favor,

es decir, en beneficio de minorías singulares».²⁴ Ahora bien, conviene hacer una apreciación. Los miembros de *Liberté pour l'Histoire* (LPH) no se posicionaron en contra de ninguna memoria particular, no negaron en ningún momento su legítima reivindicación. La cuestión, en verdad, es más compleja. El verdadero eje que articuló este debate público, que estableció posiciones y creó alteridades, no fueron las leyes memoriales sino la relación de complementariedad/ jerarquización entre la memoria y la historia en las sociedades postmodernas.

Los integrantes de LPH interpretaban la historia vaciada de todo dogma o moral y pretendían limitar la actuación de los agentes políticos al interés legítimo que pudieran sentir por el pasado de su nación. Dicho de otro modo, «el gobierno y el parlamento deben interesarse por la historia, pero no les incumbe establecer verdades oficiales».²⁵ De aquí deriva la apelación constante de sus simpatizantes a la libertad de expresión, idea a partir de la cual explicaban cómo una teoría negacionista no se refutaba por medio de una ley sino enfrentándose a ella, cuestionándola y sometiéndola a las pruebas documentales y al conocimiento histórico.

Explicada la postura del grupo LPH, estaríamos cometiendo un grave error si creyéramos que la opinión de los historiadores fue unánime respecto de la polémica suscitada tras la promulgación de la ley de febrero de 2005. Aunque la relevancia académica y social de los firmantes arriba mencionados es incuestionable, en la discusión sobre qué respuesta debía dar la disciplina en este debate público se alzaron otras voces que relativizaron, cuestionaron o criticaron la postura del grupo fundado en su momento por Rémond.

Contra dicho grupo, treinta y una personalidades, entre las que se encontraban los abogados Alain Jakubowicz y Serge Klarsfeld, el escritor Didier Daeninckx, el cineasta Danis Tanovic

y el célebre documentalista Claude Lanzmann, se pronunciaron el 20 de diciembre de 2005 al considerar «pernicioso amalgamar un artículo de ley especialmente discutible con otras tres leyes de una naturaleza radicalmente diferente». Su carta abierta, cuyo lúcido título fue *Ne mélangeons pas tout*, fue difundida en las páginas del semanario francés *L'Obs*. En ella criticaban la generalización que efectuaba LPH al arremeter contra el conjunto de leyes memoriales sin entender que la problemática de cada una de ellas es distinta y que, aunque todas se refieren a un tema memorial, su voluntad legislativa difiere. Según ellos, defender la abrogación absoluta de todas ellas, como hacía la LPH, no solo no aportaba una solución al problema sino que enturbiaba aún más el debate:

Ces trois lois ne restreignent en rien la liberté de recherche et d'expression. Quel historien a donc été empêché par la loi Gayssot de travailler sur la Shoah et d'en parler? Déclarative, la loi du 29 janvier 2001 ne dit pas l'histoire. Elle prend acte d'un fait établi par les historiens –le Génocide des Arméniens– et s'oppose publiquement à un négationnisme d'Etat puissant, pervers et sophistiqué. Quant à la loi Taubira, elle se borne simplement à reconnaître que l'esclavage et la traite négrière constituent des crimes contre l'humanité que les programmes scolaires et universitaires devront traiter en conséquence.²⁶

El 21 de diciembre de 2005, otro grupo de historiadores, esta vez el *Comité de vigilance face aux usages publics de l'histoire* (CVUH), con Gérard Noiriel (primer presidente), Michèle Riot-Sarcey, Nicolas Offenstadt y Michel Giraud a la cabeza, también criticaron en las páginas de *L'Humanité* la actitud promovida por los firmantes de LPH al considerar que fomentaba la confusión «entre memoria colectiva, escritura de la historia y educación». Y continuaban su comunicado manifestando su voluntad de hacer de los académicos un nexo de unión entre la sociedad y el mundo político: ni los historiadores regen-

tan en exclusividad la memoria colectiva ni los políticos la capacidad para inferir en la investigación y la enseñanza de la historia.²⁷

Noriel, Offenstadt y sus compañeros defendían que el contenido impartido en la docencia no debía estar fijado ni condicionado por la voluntad política, algo compartido por el grupo de los treinta y uno y por los signatarios de *Liberté Pour l'Histoire*. Pero las diferencias entre grupos afloran cuando nos cuestionamos qué papel debe tener el historiador en la construcción de memoria y qué se debía hacer con las cuatro leyes memoriales. En cuanto a lo primero, «el CVUH se cuida mucho de querer santificar el campo de estudios históricos, y reivindica un rol bisagra entre lo sabio y lo profano».²⁸ Respecto a lo segundo, la postura del CVUH es idéntica a la manifestada por los firmantes de *Ne mélangeons pas tout* en cuanto a su crítica a la abrogación completa que preconizaba LPH. El CVUH aceptaba «la legitimidad de ciertas leyes al constituir una manifestación del carácter democrático de la sociedad francesa»,²⁹ postura compatible con una demanda de modificación de la ley de 23 de febrero de 2005 –en concreto, su artículo cuarto– y una paralización de la instrumentalización de la historia.

Los intensos debates sobre las leyes memoriales y la capacidad de movilización institucional de los historiadores más próximos al poder político provocaron la creación de un organismo encargado de reflexionar y fijar un programa de actuación respecto de la cuestión. Para tal fin, el 25 de marzo de 2008 se creó una Comisión de Información a iniciativa del presidente de la Asamblea Nacional, Bernard Accoyer,³⁰ –quien actuó también de portavoz–, comisión compuesta por veintidós diputados pertenecientes a todos los grupos parlamentarios.

Entre abril y octubre de 2008 se escucharon las opiniones de sesenta y nueve personalidades en comisiones abiertas a la prensa y se

decidió publicar un informe bajo el título *Rassembler la nation autour d'une mémoire partagée*. La labor de la Comisión era hacer comprender la complejidad de las relaciones entre historia y memoria así como hacer constar los riesgos que implica legislar sobre la primera recurriendo a categorías jurídicas como «crimen contra la humanidad» o «genocidio». En vista de lo analizado en las centenares de páginas del informe, la Comisión Accoyer acordó mantener en vigencia las cuatro leyes memoriales pero no promulgar ninguna más.

Para justificar esta decisión, la Comisión se remitía a las recomendaciones recogidas a lo largo de la elaboración del informe y se mostraba consciente de la incompreensión que generaría en la opinión pública francesa la anulación de dichas leyes; se razonaba, además que las normas fueron adoptadas teniendo en cuenta una demanda de reconocimiento por parte de ciertos compatriotas franceses.³¹ En cuanto a los argumentos esgrimidos para la no-promulgación de más disposiciones de tal estilo, la Comisión se remitía a dos premisas principales: que la historia no pertenece a ninguna mayoría parlamentaria y que la multiplicación de leyes memoriales convertía a los historiadores en potenciales culpables de posibles delitos de opinión.

En suma, del análisis del informe sobresalían las siguientes conclusiones: la incapacidad de un Parlamento democrático para legislar sobre cuestiones memoriales; la conservación en vigor de las leyes memoriales ya promulgadas; la recomendación de no-intervención del Parlamento en los programas de enseñanza; y la capacidad de la Asamblea para continuar emitiendo recomendaciones y adoptar resoluciones que no tengan fuerza de ley y no puedan penalizar a los historiadores. Asimismo, la Comisión realizaba un llamamiento en favor de la reunificación de las memorias europeas y de la construcción del proyecto común europeo.

Conclusiones

En la introducción de este artículo mencioné varias causas asociadas al *boom memorial* que vivimos desde hace algunas décadas –preeminencia de la figura de la víctima, injerencia política, defensa de las identidades particulares y Derechos Humanos, etc.– que son aplicables a geografías diversas. Ahora bien, el caso francés conserva ciertas peculiaridades. Es evidente que el fenómeno memorial no se circunscribe solo al Hexágono, la globalización de la memoria es un hecho evidente y la recuperación del pasado traumático es un proceso global, pero Francia destacó por algunas singularidades importantes, como la promulgación de un *corpus* de leyes memoriales numeroso y heterogéneo, la presencia mediática de los historiadores franceses y la consolidación de la historia del tiempo presente.

Hemos visto que la *Assemblée Nationale* promulgó en fases sucesivas un conjunto de leyes memoriales de índole diversa –sobre la Shoah, el genocidio armenio, la esclavitud transatlántica y la contribución nacional de los repatriados y la enseñanza positiva de la colonización– que aunque no comportaban disposiciones de carácter penal –a excepción de la ley Gayssot– parecían demostrar una «santuarización» –tal es el término que utilizó la Comisión Accoyer– de ciertos episodios históricos, cuestión que propicio –junto a la injerencia cada más evidente del mundo político en la divulgación histórica– la aparición de diversas asociaciones de historiadores como *Liberté Pour l'Histoire* o el *Comité de vigilance face aux usages publics de l'histoire*, instituidas en 2005. En dicho año comienza a emplearse el término «leyes memoriales» para referirse a este conjunto de textos legislativos, de los que la ley de 1990 sería el primero, aunque en el momento de su promulgación, esta no fue interpretada como tal.

En relación a la promulgación de las leyes memoriales, hemos comprobado que hubo en-

tre los historiadores numerosas discrepancias y discusiones: unos defendían la abrogación completa de todas las leyes publicadas hasta la fecha; otros solamente las que interferían de manera directa en la labor investigadora y en la docencia.

En definitiva, el lastre cada vez más pesado en la conciencia colectiva que suponen los pasados oscuros de las historias nacionales guarda relación estrecha con los cambios en los modos de conexión con el pasado pero también la complicada convivencia entre el poder, el conocimiento y la sociedad. Transformaciones que, como señalaba Henry Rousso, se dejaban sentir incluso en la percepción del tiempo y del espacio: paso de la identidad nacional al tiempo mundial por medio de un proceso de globalización de la memoria, un fenómeno caracterizado, ante todo, por la americanización del Holocausto.

Fuentes

Assemblée Nationale: <http://www.assemblee-nationale.fr/>

Comité de vigilance face aux usages publics de l'histoire: <http://cvuh.blogspot.com.es/>

Gouvernement français: <http://www.gouvernement.fr/>

Institut d'histoire du temps présent: <http://www.ihtp.cnrs.fr/content/linstitut-dhistoire-du-temps-present>

L'Histoire: <http://www.lhistoire.fr/>

L'Humanité: <https://www.humanite.fr/>

L'Obs: <http://tempsreel.nouvelobs.com/>

Légifrance (Service public de l'accès au droit français): <https://www.legifrance.gouv.fr/>

Liberté pour l'Histoire: <http://www.lph-asso.fr/>

Naciones Unidas: <https://www.un.org/>

Sénat français: <https://www.senat.fr/>

BIBLIOGRAFÍA

ACCOYER, Bernard (Président-Rapporteur), *Rassembler la nation autour d'une mémoire partagée Rapport d'information n.º 1262 fait au nom de la*

mission d'information sur les questions mémorielles, París, Assemblée nationale, 2008.

ADJEMIAN, Boris, «Lois mémorielles: un débat privé de sens», *La Revue Socialiste* n.º 55 (julio 2014), pp. 17-22.

ARON, Robert, *Histoire de Vichy, 1940-1944*, Fayard, París, 1954.

BAER, Alejandro, *Holocausto. Recuerdo y representación*, Losada, Madrid, 2006.

BLANCHARD, Pascal y VEYRAT-MASSON, Isabelle (dirs.), *Les guerres de mémoires. La France et son histoire*, La Découverte, París, 2008.

BLANCHARD, Pascal y VEYRAT-MASSON, Isabelle, «Les guerres de mémoires: un objet d'étude?», *Tracés. Revue de Sciences humaine* n.º 9 (2009), pp. 43-52.

CEAMANOS LLORENS, Roberto, «Pascal Blanchard e Isabelle Veyrat-Masson (dir.), *Les guerres de mémoires. La France et son histoire. Enjeux politiques, controverses historiques, stratégies médiatiques*. Préface de Benjamin Stora. Paris: La Découverte, 2010 (1.ª ed. 2008). 335 pp.», *Historiografías* n.º 1 (enero-junio 2011), pp. 136-140.

CEAMANOS LLORENS, Roberto, «La(s) Francia(s) del siglo XXI. Entre la historia y la memoria», en BRESCIANO, Juan Andrés (comp.), *La memoria histórica y sus configuraciones temáticas. Una aproximación interdisciplinaria*, Ediciones Cruz del Sur, Montevideo, 2013, pp. 151-173.

CRIVELLO, Maryline, GARCIA, Patrick y OFFENS-TADT, Nicolas (dirs.), *Concurrence des passés. Usages politiques du passé dans la France contemporaine*, Publications de l'Université de Provence, Aix-en-Provence, 2006.

DE COCK, Laurence, MADELINE, Fanny, OFFENS-TADT, Nicolas y WAHNICH, Sophie (dirs.), *Comment Nicolas Sarkozy écrit l'histoire de France. Dictionnaire critique*, Agone, Marseille, 2008.

FINKELSTEIN, Norman Gary, *La industria del Holocausto. Reflexiones sobre la explotación del sufrimiento judío*, Akal, Madrid, 2014.

GIRAUD, Michel et al., «Vigilance sur les usages publics de l'histoire!», *L'Humanité* [documento online], Saint-Denis, 21 de diciembre de 2005 [consulta diciembre de 2016]: <https://www.humanite.fr/node/341005>.

HARTOG, François y REVEL, Jacques, *Les usages politiques du passé*, Éditions de l'École des Hautes Études en Sciences Sociales, París, 2001.

- KLARSFELD, Serge et al., «Ne mélangeons pas tout», *L'Obs* [documento online], París, 20 de diciembre de 2005 [consulta diciembre de 2016]: <http://tempsreel.nouvelobs.com/culture/20051220.OBS9491/ne-melangeons-pastout.html>.
- LALIEU, Olivier, «L'invention du devoir de mémoire», *Vingtième Siècle* n.º 69 (enero-marzo de 2001), pp. 83-94.
- LÉDOUX, Sébastien, «Pour une généalogie du 'devoir de mémoire' en France», Centre Alberto Benveniste [documento online], París, febrero 2009 [consulta diciembre de 2016]: <http://www.centrealbertobenveniste.org/transversales/test-rightnav-liste-3>.
- LINDENBERG, Daniel, «Guerres de mémoire en France», *Vingtième Siècle, revue d'histoire* n.º 42 (avril-juin 1994), pp. 77-96.
- MANCERON, Gilles, «Algérie: la nécessaire reconnaissance du passé colonial», *Hommes et libertés* n.º 158 (junio 2012), pp. 26-28.
- MAZOWER, Mark, «Violencia y Estado en el siglo XX», *Historia Social* n.º 51 (2005), pp. 139-160.
- NICOLAÏDIS, Dimitri (dir.), *Oublier nos crimes. L'amnésie nationale, une spécificité française?*, Editions Autrement, París, 1994.
- NICOLAÏDIS, Dimitri, «Les historiens confrontés aux enjeux de mémoire. À propos du Comité de vigilance face aux usages publics de l'histoire», *Mouvements* n.º 45-46 (2006/3), pp. 160-165.
- NOVICK, Peter, *Judíos, ¿vergüenza o victimismo? El Holocausto en la vida americana*, Marcial Pons, Madrid, 2007.
- PAXTON, Robert, *Vichy France: Old Guard and New Order, 1940-1944*, Alfred A. Knopf, Nueva York, 1972.
- REBÉRIOUX, Madeleine, «Le génocide, le juge et l'historien», *Liberté Pour l'Histoire* [documento online], París, noviembre 1990 [consulta diciembre de 2016]: http://www.lphasso.fr/index169b.html?option=com_content&view=article&id=153&Itemid=183&lang=fr.
- ROUSSO, Henry, *Le syndrome de Vichy. De 1944 à nos jours*, Seuil, París, 1987.
- ROUSSO, Henry, «Un marketing mémoriel», *Libération* [documento online], París, 15 de febrero de 2008 [consulta diciembre 2016]: https://www.liberation.fr/evenement/2008/02/15/un-marketing-memoriel_65102.
- STERNHELL, Zeev, *La droite révolutionnaire (1885-1914). Les origines françaises du Fascisme*, Seuil, París, 1978.
- STERNHELL, Zeev, *Ni droite ni gauche. L'idéologie fasciste en France*, Éditions du Seuil, París, 1983.
- STERNHELL, Zeev, *Naissance de l'idéologie fasciste*, Fayard, París, 1989.

NOTAS

- 1 Rousso, 2008, s. p.
- 2 Nicolaïdis, 1994: 33
- 3 Blanchard y Veyrat-Masson, 2009, p. 44.
- 4 Hacén referencia a la Revolución Francesa, Dreyfus, la Primera Guerra Mundial, el comunismo, el régimen de Vichy, Mayo del 68 y la colonización francesa.
- 5 Los manuales escolares, los espacios conmemorativos y judiciales y las ya no tan nuevas tecnologías.
- 6 Ceamanos, 2011, p. 140.
- 7 Lindenberg, 1994, p. 85.
- 8 Este ejercicio de reescritura providencial del pasado reciente no fue potenciado solo por De Gaulle. El Partido Comunista Francés también fue selectivo en sus recuerdos y reivindicaciones y prefirió olvidar su connivencia con el pacto germano-soviético de agosto de 1939, para exaltar su papel de mártir en la Resistencia.
- 9 Ledoux, 2009, p. 5.
- 10 Rebérioux, 1990, s. p.
- 11 Ley n.º 90-615 del 13 de julio de 1990.
- 12 Ceamanos, 2013, pp. 162-163.
- 13 Accoyer, 2008, p. 19. La ley fue criticada duramente por la extrema derecha francesa pero también por señeras figuras públicas como Pierre Vidal-Naquet, en nombre de la libertad de expresión, y por Madeleine Rebérioux, que comparó su promulgación con el control soviético de la historia.
- 14 Ley n.º 2001-70 del 29 de enero de 2001. El Parlamento francés no fue la única cámara de representación nacional que adoptó tal resolución. El Senado belga y argentino reconocieron el genocidio armenio en marzo y abril de 1998, respectivamente, mientras que una resolución sobre dicho acontecimiento fue presentada a la Cámara de Representantes de los Estados Unidos en noviembre del año 2000.

- ¹⁵ Sobre este tema, pueden consultarse dos obras fundamentales: la publicada por Norman G. Finkelstein, *La industria del Holocausto. Reflexiones sobre la explotación del sufrimiento judío* (Akal, Madrid, 2014), donde el autor estadounidense denuncia el uso político del Holocausto por parte de las autoridades de Israel para hacer intocables sus políticas, a menudo criminales, contra el pueblo palestino. Y, en segundo lugar, el estudio de Peter Novick, *Judíos, ¿vergüenza o victimismo? El Holocausto en la vida americana* (Marcial Pons, Madrid, 2007), sobre la exportación estadounidense del Holocausto al resto del mundo.
- ¹⁶ Inundó la sociedad y buena parte de su red cultural mediante series como *Holocausto* (1978) o películas-documentales como *Shoah* (1985), se añadieron entonces grandes producciones como *La lista de Schindler* (1993) y *La vida es bella* (1997). Si se quiere continuar con el estudio de la representación cinematográfica del holocausto judío, recomiendo la obra de Alejandro Baer, *Holocausto. Recuerdo y representación* (Losada, Madrid, 2006).
- ¹⁷ Mazower, 2005, p. 141.
- ¹⁸ *Ibid.*, p. 143.
- ¹⁹ Ley n.º 2001-434 del 21 de mayo de 2001.
- ²⁰ Siglas del partido político de derechas Union pour un Mouvement Populaire, fundado en 2002 y convertido en Les Républicains en el año 2015, y que fue presidido por Sarkozy desde 2004 hasta 2012.
- ²¹ Ley n.º 2005-158 del 23 de febrero de 2005.
- ²² Nicolaïdis, 2006, p. 161.
- ²³ Manceron, 2012, p. 26.
- ²⁴ Adjemian, 2014, p. 19.
- ²⁵ Ceamanos, 2013, pp. 164-165.
- ²⁶ Klarsfeld, *et al.*, 2005: s. p.
- ²⁷ Giraud *et al.*, 2005, s. p.
- ²⁸ Nicolaïdis, 2006, pp. 161-162.
- ²⁹ Ceamanos, 2013, p. 165.
- ³⁰ Bernard Accoyer fue pieza fundamental de la derecha política aglutinada en torno a Nicolas Sarkozy y la UMP primero, y de François Fillon y Les Républicains, después. Apenas dos días más tarde de la elección interna de Fillon como candidato de LR a la presidencia de la República para las elecciones de de 2017, Accoyer fue nombrado Secretario General del partido, cargo que ostentó desde noviembre de 2016 hasta diciembre de 2017.
- ³¹ Accoyer, 2008, p. 93.

